

Fecha 13.01.2009	Sección Primera-Opinión	Página 21
---------------------	----------------------------	--------------

ARMANDO SALINAS TORRE

Elecciones *vs.* seguridad

Mientras enfrentamos retos que ponen en riesgo los cimientos del Estado mexicano, hay quienes se pelean las moronas de un supuesto botín político en las contiendas electorales.

Estamos padeciendo una violencia y una crisis económica que sólo es el síntoma de problemas aún más graves y profundos en la sociedad. En todas las épocas hay quienes prefieren la ruta corta e ilegal del supuesto éxito que tiene la acumulación de bienes materiales. La historia de los grandes y pequeños delincuentes se puede remontar a los orígenes mismos de la humanidad. No obstante lo anterior, cuando amplios sectores de la sociedad se encuentran permeados, no sólo por la delincuencia, sino también debido al temor, la indolencia y la desesperanza, de manera urgente se deben retomar los valores fundamentales de la convivencia humana y llevar a cabo las acciones que eviten el desmoronamiento de la legitimidad de lo que queda del Estado.

Desde hace ya varias décadas, el combate al narcotráfico se declaró de manera formal como un asunto de seguridad nacional, para ello sólo basta leer el Plan Nacional de Desarrollo de la administración federal del periodo de 1982-1988 (al menos dos sexenios antes de que el PAN ganara las elecciones presidenciales). Desde entonces era obvia la grave crisis institucional que existía para hacer frente a un problema que no tenía sus orígenes en nuestro territorio, sino respondía, como hoy, a una situación de elemental economía de mercados internacionales, pero que, además de ello, avanzaba velozmente el fuego de la corrupción en nuestro incipiente sistema de seguridad, como en una pradera de hierba seca.

En aquel sexenio, a pesar de las críticas y preocupaciones, ya participaban nuestras Fuerzas Armadas en esta lucha contra el narcotráfico, principalmente en la erradicación de cultivos. Esta intervención se ha venido incrementando a pasos agigantados debido a la incapacidad de las instituciones de carácter civil para diseñar, implementar y darle continuidad a una estrategia de largo alcance con el fin de evitar el riesgo que implica esta situación.

Las organizaciones que ahora controlan el narcotráfico se han diversificado y extendido su influencia en el territorio nacional y su penetración en las instituciones públicas. Ahora, estas organizaciones son preocupación de las autoridades mexicanas y de aquellas que se encuentran más allá de nuestras fronteras, como lo revelan reportes de agencias especializadas al respecto.

El presidente Felipe Calderón ha tenido que asumir con firmeza la decisión de reforzar el combate al crimen organizado empleando el último recurso de la fuerza institucional que tienen los estados: el ejército y las fuerzas armadas. Hacerlo de otra manera sería una irresponsabilidad que no está en su carácter asumir.

A pesar de los daños que le ha ocasionado al Ejército su participación en el combate al narcotráfico —estrategia que tiene más de un cuarto de siglo aplicándose— las Fuerzas Armadas han asumido y están cumpliendo la misión, no sin dificultades, día a día con valor, ahínco y patriotismo; así lo han reafirmado ante cada afrenta que se ha presentado en esta lucha. En este contexto, merecen y reciben un reconocimiento extraordinario por la sociedad en general, no en balde tienen el mayor respaldo social y la credibilidad de entre todas las instituciones públicas de este país.

A pesar de ello, también debemos hacer esfuerzos, como Estado, para que el Ejército y la Armada mexicanos, a mediano plazo, no se expongan a tal desgaste y peligro.



Continúa en siguiente hoja

Fecha 13.01.2009	Sección Primera-Opinión	Página 21
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Las organizaciones criminales diseñan una estrategia que está atacando la confianza y la seguridad de los mexicanos, hacerle frente a estas agresiones requiere diversas actividades, no sólo el empleo de la fuerza pública. Aquellas organizaciones no se han conformado con penetrar a las instituciones del sistema de seguridad y de justicia del país, sino que se avecinan riesgos importantes para nuestros procesos electorales.

El Presidente de la República, los gobernadores, el jefe de Gobierno del DF, los presidentes de todos los partidos políticos y quienes estén al frente de las instituciones responsables de organizar los procesos electorales deben ponerse de acuerdo para evitar que el crimen infiltre a nuestros representantes populares.

La contienda será muy reñida en el interior y fuera de los partidos, pero ello no debe ser pretexto para que disminuyan los consensos mínimos que deben existir en torno al combate al crimen organizado. No podemos darnos el lujo de disminuir el esfuerzo que hasta ahora ha encabezado el jefe del Estado mexicano.

Hace falta de manera urgente que se cumplan, al menos, los compromisos que se asumieron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por parte de todos, principalmente de los gobiernos estatales.

Sin duda que la crisis económica será una presión muy importante en materia de crecimiento delictivo y, por ende, de mayor inseguridad pública. Ante ello, sólo queda a los gobiernos, de los diversos órdenes, asumir un compromiso fundamental para que las instituciones a su cargo respondan a la sociedad de manera profesional, garantizando un servicio eficiente y que los procesos electorales no funcionen contra la seguridad.